



## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, cuatro (04) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

### AUTO INTERLOCUTORIO

**Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME**

<b>MEDIO DE CONTROL</b>	<b>PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS</b>
<b>DEMANDANTE</b>	<b>EDWIN LUIS GARZÓN Y OTROS</b> Correos: <a href="mailto:siembraysalva@gmail.com">siembraysalva@gmail.com</a> ; <a href="mailto:fabian15vidal@gmail.com">fabian15vidal@gmail.com</a>
<b>DEMANDADO</b>	<b>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</b> Correo: <a href="mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co">notificacionesjudiciales@cali.gov.co</a>
	<b>CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA</b> Correo: <a href="mailto:notificacionesjudiciales@cvc.gov.co">notificacionesjudiciales@cvc.gov.co</a>
<b>RADICACIÓN</b>	<b>76001-23-33-001-2018-00862-00</b>

### 1.-ASUNTO

Se procede a resolver la solicitud de medida cautelar interpuesta por la parte demandante.

### 2.- ANTECEDENTES

#### 2.1. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR

Los actores populares dentro del presente asunto, solicitan el decreto de una nueva medida cautelar, consistente en la suspensión de las obras de construcción que adelanta la **CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC** en un terreno que, según se aduce, no pertenece al **MUNICIPIO DE CALI**, y las cuales están causando grave perjuicio patrimonial y daño al medio ambiente y a los recursos naturales<sup>1</sup>.

#### 2.2. CONTESTACIÓN MEDIDA CAUTELAR

##### 2.2.1. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA.

El apoderado judicial de la entidad demandada solicita la negación de la medida cautelar formulada por la parte actora, en tanto que la misma no cumple con los presupuestos establecidos en la Ley 472 de 1998 en concordancia con la Ley 1437 de 2011 para su decreto.

---

<sup>1</sup> Documento digital denominado "003. Pruebas dte"

MEDIO DE CONTROL:	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS
RADICACIÓN:	76001-23-33-001-2018-00862-00
DEMANDANTE:	EDWIN LUIS GARZÓN Y OTROS
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y OTRO

Además, señaló de un lado, que los actores son ocupantes de mala fe, pues han reconocido su invasión en el predio; y de otro, que las medidas solicitadas no pueden ejecutarse en el predio Bataclán<sup>2</sup>.

### 2.2.2. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Guardó silencio<sup>3</sup>.

## 3.- PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde al Despacho resolver si en el presente asunto se cumplen los presupuestos normativos para hacer procedente el decreto de la medida cautelar, consistente en la suspensión de las obras de construcción que al parecer adelanta la **CVC** en terrenos que no son de propiedad del **MUNICIPIO DE CALI**, y las cuales presuntamente causan graves daños ambientales.

## 4.-TESIS DEL DESPACHO

El Despacho negará la medida cautelar solicitada, en atención a que luego de realizar el análisis preliminar y sumario que exige la norma que regula esa figura, se determinó que los demandantes no aportaron prueba alguna que demuestre la afectación de derecho colectivo alguno, y que habiliten al juez para la adopción de medidas preventivas.

## 5.- CONSIDERACIONES

### 5.1. Medidas cautelares en las acciones populares.

El inciso 2º del artículo 2º de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, dispone que las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible; y al tenor del artículo 9º *ibídem*, esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

Por su parte, el artículo 17 de la Ley 472 de 1998, preceptúa que en desarrollo del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el juez tendrá la facultad de tomar las medidas cautelares necesarias para impedir perjuicios irremediables o irreparables o suspender los hechos generadores de la amenaza a los derechos colectivos.

En armonía con dicha disposición, el artículo 25 de la citada Ley, prevé que antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado.

En particular, conforme a esta norma, podrá decretar las siguientes:

---

<sup>2</sup> Documento digital denominado "007. Descorre traslado CVC".

<sup>3</sup> Documento digital denominado "010. A despacho".

MEDIO DE CONTROL:  
RADICACIÓN:  
DEMANDANTE:  
DEMANDADO:

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS  
76001-23-33-001-2018-00862-00  
EDWIN LUIS GARZÓN Y OTROS  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y OTRO

a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando;

b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;

c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas;

d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo.

El decreto de una de tales medidas, o de otras distintas a éstas, pero que resulten procedentes para prevenir un daño inminente a los derechos e intereses colectivos o para hacer cesar el que se hubiere causado a aquellos, debe soportarse lógicamente en elementos de prueba idóneos y válidos que sean demostrativos de tales circunstancias; es precisamente la existencia de tales elementos de juicio lo que permitirá motivar debidamente la decisión del juez cuando disponga una medida cautelar para la protección de tales derechos.

A su turno, la Ley 1437 de 2011, en el párrafo del artículo 229 señala que: *"(...) Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio"*.

Seguidamente, el artículo 230 *ibídem*, indica que las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipadas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, y el artículo 231 del mismo estatuto, consagra los requisitos para decretar las medidas cautelares y señala que las mismas son procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

*"(...) 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.*

*2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.*

*3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.*

*4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:*

*a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o*

*b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios"*.

MEDIO DE CONTROL:  
RADICACIÓN:  
DEMANDANTE:  
DEMANDADO:

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS  
76001-23-33-001-2018-00862-00  
EDWIN LUIS GARZÓN Y OTROS  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y OTRO

Al respecto la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado<sup>4</sup> ha expresado que, “el decreto de una medida cautelar que resulte procedente para prevenir un daño inminente a los derechos e intereses colectivos o para hacer cesar el que se hubiere causado a aquellos, debe soportarse lógicamente en elementos de prueba idóneos y válidos que sean demostrativos de tales circunstancias; pues es precisamente la existencia de tales elementos de juicio los que permitirán motivar debidamente la decisión del juez cuando disponga una medida cautelar para la protección de tales derechos”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Así las cosas, es menester resaltar que el decreto de las medidas cautelares en el medio de control de “Protección de los derechos e intereses colectivos” se encuentra supeditado a que resulten procedentes para prevenir un daño inminente a los derechos e intereses colectivos, o para hacer cesar el que se hubiere causado a aquéllos, fundado en elementos de prueba idóneos y válidos de tales circunstancias. De esta manera es dable concluir que, el propósito de las medidas cautelares dentro de una acción popular, es prevenir un daño inminente, en caso de que aún se encuentre intacto el derecho o interés colectivo, pues en caso contrario, es decir, si ya se ha causado el perjuicio, la medida debe estar dirigida a hacer cesar toda acción u omisión.

## 6. CASO CONCRETO

En el *sub examine*, la parte actora solicita el decreto de una medida cautelar consistente en la suspensión de las obras de construcción que al parecer adelanta la **CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC** en un terreno que, según se aduce, no pertenece al **MUNICIPIO DE CALI**, y las cuales presuntamente están causando grave perjuicio patrimonial y daño al medio ambiente y a los recursos naturales.

Sea lo primero indicar que, de conformidad con el marco normativo señalado en precedencia, dentro de esta clase de acciones constitucionales, el juez conductor, en cualquier momento procesal, de oficio o a petición de parte, tiene la facultad de tomar las medidas cautelares necesarias para impedir perjuicios irremediables o irreparables o suspender los hechos generadores de la amenaza a los derechos colectivos; decisión que debe contar con el material probatorio que la soporte.

Ahora bien, en el presente caso, de la revisión del escrito de medida provisional observa el Despacho que los peticionarios no aportaron elemento de juicio alguno que sustente su solicitud y que permitan determinar su procedencia. De manera que, se desconoce qué tipo de obras son las que presuntamente está realizando la entidad accionada, sobre qué predio, y especialmente, si se está generando algún tipo de afectación de carácter ambiental que atente contra un derecho colectivo.

En este punto, es menester señalar que mediante auto interlocutorio No. 072<sup>5</sup> del 06 de julio de 2020, esta Corporación ya se había pronunciado en torno a

---

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2011, Radicación número: 19001 2331 000 2010 00464 01 (AP).

<sup>5</sup> Folio 560 a 564.

MEDIO DE CONTROL:  
RADICACIÓN:  
DEMANDANTE:  
DEMANDADO:

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS  
76001-23-33-001-2018-00862-00  
EDWIN LUIS GARZÓN Y OTROS  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y OTRO

una solicitud de medida cautelar que propuso la parte actora con la demanda; oportunidad en la que luego de analizar los medios de pruebas aportados con el libelo introductorio, se concluyó que no había lugar a disponer el decreto de la misma.

Así las cosas, es claro que en el caso que nos ocupa, al no tenerse por demostrada la presunta amenaza que aducen los actores populares, y al no contarse con elementos probatorios que sustenten la adopción de la medida provisional, habrá de negarse tal pedimento.

Aunado a lo anterior debe decirse que la medida cautelar formulada en esta ocasión (suspensión de unas obras de construcción), no guarda ninguna relación con el objeto de la presente acción popular, la cual según el escrito de la demanda, se adelanta en procura de obtener la protección de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, entre otros, los cuales presuntamente han sido vulnerados por parte de las entidades accionadas, al haberse retirado de la base de datos catastral del **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, los predios del asentamiento humano de desarrollo incompleto Bataclán, en el que residen y en donde actualmente se encuentra ubicado el “Ecoparque Tres Cruces Bataclán”.

Por lo anterior, el Despacho no estima pertinente decretar la medida cautelar solicitada; no obstante, vale la pena aclarar que de conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, “la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”.

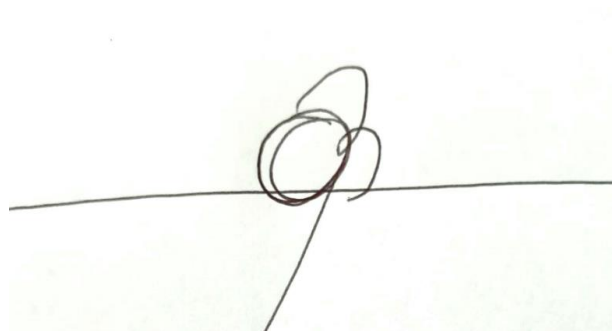
En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

### **RESUELVE**

**PRIMERO: NEGAR** la solicitud de medida cautelar solicitada por la parte demandante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: COMUNICAR** el presente auto a los apoderados de las partes, al correo electrónico suministrado por éstos.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, is written over a light green rectangular background.

**RONALD OTTO CEDEÑO BLUME**  
Magistrado